

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	DORALBA CALDERON AGUILAR
DEMANDADOS	COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-017-2021-00359-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Adiciona y Confirma

Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **DORALBA CALDERÓN AGUILAR** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 026**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por las apoderadas judiciales de COLPENSIONES y de PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia que profirió el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 25 de marzo de 2022; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que, la demandante, quien nació el 18 de septiembre de 1970, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde noviembre de 1991; posteriormente, en noviembre de 1994, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Se duele que los asesores ejecutivos del RAIS no le brindaron la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante al momento de ser atendida para afiliarse a PROTECCIÓN S.A., por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen pensional.

Indicó que las proyecciones económicas que le fueron presentadas por PROTECCIÓN S.A. dan cuenta de que la pensión que le hubiera correspondido en el régimen de prima media con prestación definida habría resultado significativamente superior a la que le sería pagada en el régimen de ahorro individual cuando cumpla los requisitos pensionales mínimos.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PROTECCIÓN S.A., y que en consecuencia, se ordene a dicha administradora trasladar a COLPENSIONES la totalidad del saldo de su cuenta de ahorro individual con los respectivos rendimientos financieros, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas y aceptar a la demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas a descorrer el traslado de esta acción.

COLPENSIONES, a través de la contestación allegada (PDF 7 del expediente digital), se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; indicó que no le constan los hechos de la demanda, salvo la edad de la demandante y la reclamación administrativa, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN REALIZADO POR LA DEMANDANTE, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y la EXCEPCIÓN INNOMINADA O GENÉRICA”*.

PROTECCIÓN S.A. descorrió el traslado de la acción, según se observa en el PDF 8 del expediente digital. A través de dicha respuesta aceptó la afiliación de la actora a esa administradora, su edad, las semanas cotizadas, la proyección realizada y el traslado de régimen realizado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, formuló las excepciones perentorias que denominó *“Inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, Buena fe, Prescripción, Aprovechamiento indebido de los recursos*

públicos y del Sistema General de Pensiones, Reconocimiento de la restitución mutua de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa”, entre otras.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 25 de marzo de 2022, la Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S.A., y le impuso la obligación de trasladar a COLPENSIONES, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutora de la sentencia, los recursos que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la asegurada, incluyendo el capital con sus respectivos rendimientos financieros, cuotas de administración y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima.

A COLPENSIONES le ordenó aceptar el retorno de la demandante, recibir las mencionadas sumas, activar su afiliación a prima media sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral y continuar siendo su administradora de pensiones.

Condenó en costas procesales únicamente a PROTECCIÓN S.A., absteniéndose de hacerlo frente a COLPENSIONES.

El principal argumento de la A quo para declarar la ineficacia, desarrolló toda la tesis jurisprudencial que en la actualidad sostiene la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inversión de la carga de la prueba, la insuficiencia del formulario para acreditar asesoría, la relevancia de la oportunidad en que se reciba la asesoría, la imposibilidad de que la ineficacia se sanee por prescripción o por traslados en el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad y el derecho a la libre selección de régimen pensional.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue apelada por las apoderadas judiciales de PROTECCIÓN S.A. y de COLPENSIONES.

Apelación de PROTECCIÓN S.A: Recurrió la decisión de manera parcial, únicamente en cuanto ordenó a la entidad trasladar las comisiones de administración. Lo sustentó afirmando que estos rubros están plenamente autorizados por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que se trata de sumas que están autorizadas en ambos regímenes pensionales, son exequibles y la norma se encuentra vigente.

Agregó que dichas sumas se manejan en cuentas separadas e independientes de la cuenta de ahorro individual de la demandante, ya que no tienen por finalidad financiar la mesada pensional de la demandante, por lo que la mesada pensional de la asegurada nunca se vería afectada. Adujo que esas cuotas de administración compensan los rendimientos que ha generado a lo largo del tiempo la cuenta de ahorro individual de la demandante.

Sugirió que, al ser la consecuencia de la ineficacia entender que las cosas deban volver al estado anterior, lo lógico debe ser que se trasladen los aportes de la asegurada a COLPENSIONES, únicamente con los rendimientos que esas sumas hubieren generado en el régimen de prima media con prestación definida, ya que, a su juicio, es de público conocimiento que la rentabilidad del RAIS es superior a la del régimen de prima media con prestación definida.

Manifestó que con la presente condena COLPENSIONES estaría incurriendo en un enriquecimiento sin causa al recibir doblemente los rendimientos financieros y las cuotas de administración descontadas.

Finalmente, solicitó se aplique la prescripción a la obligación de trasladar estas sumas, como quiera que se trata de rubros que no financian la pensión de

vejez de la demandante y se trata de obligaciones de tracto sucesivo, por lo que sí serían obligaciones prescriptibles.

Apelación de COLPENSIONES: Estuvo inconforme con todo el sentido de la decisión y solicitó su revocatoria, argumentando que el traslado de régimen que llevó a cabo la demandante a través de PROTECCIÓN S.A. fue completamente válido y cumplió con todos los presupuestos legales. Agregó que no resulta pertinente que se deba activar la afiliación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida, como quiera que ello sería ir en contravía del artículo 2º de la Ley 797 de 2003. Destacó que la actora ha cotizado por más de 20 años a la AFP demandada y que, en este caso no se presenta ningún acto de ineficacia, ya que se cumplieron todos los requisitos de la esencia del negocio jurídico.

Solicitó que no se condene a COLPENSIONES en costas procesales de segunda instancia, ya que la entidad fue un tercero ajeno al proceso que no debe asumir el pago de las mismas.

Alegatos de Conclusión:

Los apoderados judiciales de las partes se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión en segunda instancia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da

mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por las apoderadas judiciales de PROTECCIÓN S.A y de COLPENSIONES en sus respectivos recursos de apelación, sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional y la aceptación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida que administra, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que realizó la demandante, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la

propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya

trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante en el PDF 1 del expediente digital, se comprueba que la señora DORALBA CALDERON AGUILAR, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde noviembre de 1991; posteriormente, en noviembre de 1994, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones de la A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que la AFP convocada a juicio (PROTECCIÓN S.A.) no alcanzó a probar haberle brindado asesoría a la actora con suficiencia en su proceso de traslado, en el momento en que la atendió para afiliarla.

Ahora, como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados. La simple

firma del formulario por parte del asegurado no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que le implicaban el cambio de régimen, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

Es importante destacar que el derecho a la libre elección de régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 en el marco del derecho a la seguridad social no riñe con las disposiciones legales que contemplan la exigencia del formulario, debiéndose entender que, más allá de la documentación formal, existe un sustrato material directamente relacionado con los derechos fundamentales que exige que el asegurado tenga una completa asesoría en su proceso de traslado de régimen pensional, la cual coloca a la respectiva administradora en el pleno del cumplimiento de sus obligaciones profesionales en ese sentido, bajo la dinámica del *“buen consejo”*.

Esta sala encuentra que no le asiste razón a la apoderada judicial de COLPENSIONES cuando, para oponerse a la ineficacia declarada, argumenta que el acto de traslado fue completamente válido y cumplió con todos los presupuestos legales. Al respecto, es preciso reseñar que, contrario a lo esbozado por la recurrente, la asesoría, acompañamiento, suministro de información oportuna y buen consejo es un presupuesto de la validez del acto jurídico de traslado. No puede asumirse que suscribir el formulario cuando se ha omitido dar un acompañamiento por parte del fondo incluso desde la etapa contractual constituya un cumplimiento de las obligaciones por parte del fondo privado.

Ahora, en cuanto a lo expresado por la apoderada judicial de COLPENSIONES, en el sentido que la actora estaría imposibilitada de conformidad al artículo 2º de la Ley 797 de 2003 para retornar a prima media, ello no es cierto, ya que la referida restricción legal temporal solo opera en condiciones ordinarias de traslado para salvaguardar un tema de sostenibilidad financiera, pero no puede aplicarse frente a situaciones en las que el acto jurídico no ha nacido a la vida jurídica y se declara la ineficacia, en tanto en

estos casos no surgen a la vida jurídica los derechos y obligaciones del acto, al haberse omitido el deber de información.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado de la señora DORALBA CALDERON AGUILAR dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional de la demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP PROTECCIÓN SA., esto es, se encuentra válidamente afiliada al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele a la demandante. A su vez, este tema constituye punto de disenso en la apelación de PROTECCIÓN S.A.

La apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. solicitó, se revoque la orden de trasladar las cuotas de administración dada en el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia, al considerar que estos rubros están plenamente autorizados por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que se trata de sumas que están autorizadas en ambos regímenes pensionales, son exequibles y la norma se encuentra vigente. Agregó que dichas sumas se manejan en cuentas separadas e independientes de la cuenta de ahorro individual de la demandante, ya que no tienen por finalidad financiar la mesada pensional de la demandante, por lo que la mesada pensional de la asegurada nunca se vería afectada. Adujo que esas cuotas de administración compensan los rendimientos que ha generado a lo largo del tiempo la cuenta de ahorro individual de la demandante.

A su vez, sugirió que, al ser la consecuencia de la ineficacia entender que las cosas deban volver al estado anterior, lo lógico debe ser que se trasladen los aportes de la asegurada a COLPENSIONES, únicamente con los rendimientos que esas sumas hubieren generado en el régimen de prima media con prestación definida, ya que, a su juicio, es de público conocimiento que la rentabilidad del RAIS es superior a la del régimen de prima media con prestación definida; manifestó que con la presente condena COLPENSIONES estaría incurriendo en un enriquecimiento sin causa al recibir doblemente los rendimientos financieros y las cuotas de administración descontadas y, solicitó se aplique la prescripción a la obligación de trasladar estas sumas, como quiera que se trata de rubros que no financian la pensión de vejez de la demandante y se trata de obligaciones de tracto sucesivo, por lo que sí serían obligaciones prescriptibles.

Esta sala encuentra que no le asiste razón a la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. en ninguno de los puntos sobre los que llama la atención de este colegiado, teniendo en cuenta que, a la entidad pública co demandada COLPENSIONES, debe garantizársele la integridad de la cotización sin descuento alguno, ya que será quien reciba la afiliación de la asegurada y para todos los efectos legales la tenga afiliada al fondo público sin solución de continuidad.

Si bien, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 establece la facultad que tienen las administradoras de descontar los gastos de administración y demás descuentos, ello opera en el marco de un traslado que no adolezca de eficacia, esto es, que se trate de una pertenencia al régimen legítima que no sea ineficaz. Así, en actos jurídicos que conserven su validez y se hayan realizado en condiciones ordinarias con la garantía del buen consejo, el acompañamiento y la asesoría, es evidente que dichos descuentos pueden realizarse y no existiría lugar a devolverlos. No obstante, mientras el acto sea ineficaz, se encuentra justificado el retorno económico global de todo lo que se hubiere generado en virtud de ese acto que no nació a la vida jurídica.

Los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que la actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de PROTECCIÓN S.A., en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en el régimen de prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por PROTECCIÓN S.A., sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliada la actora. Desde este punto de vista, no es cierto, como lo hace ver la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A., que en este caso se esté generando un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, por el simple hecho de recibir unas sumas que, en condiciones normales, debió haber percibido. No puede entenderse que se genere enriquecimiento al recibir COLPENSIONES los rendimientos y las cuotas de administración, ya que se trata de dos conceptos distintos que obedecen a causas diferentes; los primeros, se han generado sobre el capital de la asegurada y hacen parte de su cuenta de ahorro individual y, los segundos deben realizarse en virtud de la autorización legal contenida en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, ya que es COLPENSIONES donde siempre ha permanecido afiliada la demandante.

Al respecto, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

Ahora, en cuanto a la solicitud de que se aplique la prescripción extintiva sobre la obligación de traslado de los descuentos realizados, esta sala no accede a lo solicitado, teniendo en cuenta que, si bien las referidas sumas no están destinadas a financiar la pensión de vejez, lo cual las excluiría del carácter imprescriptible propio de la pensión y de todo lo relacionado con su formación, no es menos cierto que es en esta sentencia que se está declarando

la ineficacia con la imposición de las obligaciones consecuenciales a la misma, por lo que no hay lugar a hablar de la extinción de la obligación por transcurso del tiempo, como quiera que están obligaciones derivan de una sentencia que incluso no se ha ejecutoriado. Además de lo anterior, la ineficacia equivale a una completa ausencia de efectos jurídicos del acto, lo cual supone que todos los efectos deben regresar al estado anterior.

Por lo demás, pretender que se le prive a la asegurada de los rendimientos generados o que se llegue a establecer una regla de equivalencia acogiendo los rendimientos que se generarían en prima media, no es una medida que se ajuste a derecho, como quiera que la ineficacia en que devino el acto no fue a causa o por la culpa de la asegurada, debiendo entenderse que los rendimientos financieros ingresaron a su patrimonio y no pueden desconocerse, ya que ello supondría que PROTECCIÓN estaría sacando provecho de su propia omisión.

Es de tal relevancia el principio de sostenibilidad financiera y la importancia de que el mismo no se vea limitado por omitir ordenar retornar todos los descuentos que le hicieron a la cotización, que esta sala advierte que la orden dada por la A quo en el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia resulta insuficiente, ya que también debe ordenarse a PROTECCIÓN S.A. que, además de trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante con sus respectivos rendimientos, cuotas de administración y porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, también deba trasladar las primas previsionales que se omitieron ordenar por la A quo, que PROTECCIÓN S.A. asuma la indexación de estos rubros y que el traslado de los recursos ordenados se haga de manera discriminada.

En consecuencia, **se confirmará** la decisión de la A quo de ordenar a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la afiliada con sus respectivos rendimientos, la cuotas de administración y los porcentajes del fondo de garantía mínima y, **se adicionará** el numeral 2º de la parte resolutive de la

sentencia, a efectos que PROTECCIÓN S.A., también traslade las primas previsionales, que pague la indexación calculada hasta el momento del traslado de los recursos sobre las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima, y que, al momento de cumplir la orden impartida, remita a Colpensiones la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo de PROTECCIÓN S.A. y de COLPENSIONES, por resultar vencidas en el recurso de alzada, y en favor de la señora DORALBA CALDERON AGUILAR. Agencias en derecho: medio salario mínimo legal mensual vigente para 2022, a cargo de cada una de dichas entidades.

La apoderada judicial de COLPENSIONES adujo en la sustentación del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, que COLPENSIONES es un tercero que nada tuvo que ver en la celebración del acto jurídico, solicitando a este colegiado que no se le impusiera condena en costas de segunda instancia a esa entidad, al haber actuado conforme a la Ley. Al respecto, es preciso precisar que, no era la oportunidad procesal de la sustentación de la alzada en primera instancia, el momento idóneo y correspondiente para que planteara esa solicitud, ya que esa oportunidad estaba destinada a que sustentara su inconformismo con la sentencia de primera instancia y en la misma COLPENSIONES no había sido condenado en costas procesales de primera instancia. Esta sala no acoge esos planteamientos, ya que la condena en costas que se ha emitido en esta instancia en contra de COLPENSIONES obedece al criterio objetivo establecido en el artículo 365 del Código, por haber resultado vencida en el recurso de apelación, correspondiendo procesalmente esta condena en los términos reseñados. La consideración de que COLPENSIONES fue un tercero ajeno a la relación contractual entre la asegurada y PROTECCIÓN S.A. es cierta, y por

ello la A quo no le impuso condena en costas procesales a COLPENSIONES en primera instancia, sin embargo, su desventura de la alzada, hace imperiosa la misma en esta instancia.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efectos de que, **PROTECCIÓN S.A.**, traslade a **COLPENSIONES**, además de las sumas ordenadas, también traslade las primas previsionales, que pague la indexación calculada hasta el momento del traslado de los recursos sobre las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima, y que, al momento de cumplir la orden impartida, remita a Colpensiones la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

TERCERO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a **PROTECCIÓN S.A.** y a **COLPENSIONES**, y en favor de la señora **DORALBA CALDERON AGUILAR**. Agencias en derecho: medio SMLMV para 2022, a cargo de cada una de dichas entidades, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada